

Por *UPyD*



Imaginemos un partido político que cede a la tentación de financiarse ilegalmente. ¿Qué ocurriría en un Estado democrático corriente? Que el caso se investigaría en un plazo razonable. En España, sin embargo el caso Pallerols ha tardado 13 años en instruirse. **La justicia lenta es menos justicia**, y muchas veces no es justicia en absoluto.

En ese Estado democrático corriente, se celebraría un juicio. Cabría la posibilidad de un acuerdo entre las partes, pero la Fiscalía no admitiría, tras tantos años de instrucción, una rebaja de las penas que librara a los responsables de la cárcel. Pero esto es España, y la Fiscalía, un órgano que debería ser independiente pero que rara vez lo ha sido, acepta un trato que **evita que los ladrones de Unió Democrática de Catalunya ingresen en prisión.**

El partido político admite la **financiación ilegal**. En nuestro Estado imaginario, Unió tendría que hacer frente a una responsabilidad penal, pero no en España, porque cuando se cometió el delito a las formaciones políticas no se les aplicaba el Código Penal, así que sólo tendrán responsabilidad civil. Esto ha cambiado gracias a una iniciativa de **Unión Progreso y Democracia**, y en el futuro no será así. Mientras tanto, el dinero que pagará Unió por el delito cometido saldrá de las subvenciones que recibe del Estado. Es decir, del bolsillo del contribuyente español.

En España, incluso cuando no hay acuerdo con la Fiscalía, el Gobierno tiene siempre la posibilidad, y la ejerce con largueza, de **indultar a los corruptos**. Ya ocurrió a principios del

año pasado con otros dos condenados del nacionalismo catalán.

Y la cosa no acaba aquí. Porque, una vez indultado, una vez evitada la prisión o una vez impune el político de turno, hay que buscarle una colocación, que tendrá que ganarse la vida. Entonces entra en juego la [revolving door](#) y los contactos con empresas privadas pero muy politizadas. Así, el caso de **Rodrigo Rato**. Y quién sabe si también el de

Duran Lleida

, el líder de UDC que dijo que dimitiría si se probaba la corrupción que ahora admite su partido. Si a estas horas no ha dimitido puede que sea porque en Telefónica no hay vacantes. Duran habló hace unas semanas de "

las cloacas del Estado

" para desacreditar las investigaciones sobre los casos de latrocinio que están proliferando en la finca que CiU se ha hecho en Cataluña. Ahora, de esas cloacas (en las que Duran lleva décadas trabajando) emanan los vapores del pacto con la Fiscalía que le evitan el trance de declarar ante un juez. Es natural que un hombre que se ve a sí mismo como

trabajador del alcantarillado

se refugie por la noche en el distinguido lujo de su *suite*

en un conocido hotel madrileño.

Pero todavía hay más. Unió es una de las dos patas de CiU, la coalición hegemónica del nacionalismo catalán. Ha quedado acreditado que **CiU no entiende más Estado de Derecho que su voluntad**

. No sólo están inmersos en incontables casos de corrupción, sino que se niegan a cumplir sentencias judiciales y amenazan con un referéndum que saben ilegal para romper la democracia española. A pesar de lo cual ayer mismo el Presidente del Gobierno español y el heredero de la Corona se montaron en un tren con el insurrecto Presidente de la Generalitat (y líder de la coalición a la que pertenece el partido que ha confesado su corrupción), poco después de anunciar un plan nacional por la regeneración democrática. Esta relación tan estrecha entre gobernantes, que se disfraza como "normalidad democrática" y es inmune a cualquier ofensa o delito, tiene un nombre: colusión.

Para finalizar el cuadro hay que hacer una mención a **los medios catalanes**, holgadamente subvencionados por el nacionalismo: ninguno lleva a portada el caso Pallerols. No vaya a ser que el electorado empiece a preguntar.

Así se cierra el círculo: unos partidos que roban; una justicia que actúa poco, tarde y mal; una Fiscalía politizada; privilegios penales para los partidos; salvavidas para los corruptos y los incompetentes en forma de indultos y sillones en empresas cercanas al poder; entendimiento entre los partidos para hacerse favores (electorales, judiciales, económicos...); medios de comunicación concertados.

Esta mezcla de corrupción, arreglos bajo cuerda, instituciones trampeadas y redes clientelares es lo que se conoce como **partitocracia**, y su erradicación es una necesidad que va a exigir la implicación de todos los españoles. Nadie puede seguir mirando para otro lado.